

SEÑOR:
JUEZ ADMINISTRATIVO DE SANTIAGO DE CALI
(REPARTO)
E.S.D.

Referencia: MEDIO DE CONTROL REPARACION DIRECTA

Afectado: JOSE LIBARDO ARCE

Entidades Públicas: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI y/o EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C. EMRU

FABIAN ANDRES PORTILLA CASTRILLON, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.064.342, Abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional No. 178.456 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado Judicial del señor **JOSE LIBARDO ARCE**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.662.279, quien será la parte demandante en el presente proceso, me permito presentar demanda contra el **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI y/o EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C.E EMRU**, quienes serán la parte demandada, representada por quienes estén a su cargo, en ejercicio de la acción de reparación directa, impetro esta demanda en la siguiente forma:

PRETENSIONES

PRIMERA: Declarar **administrativa y extracontractualmente responsables** al **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI** representado por el Señor Alcalde Municipal o por quien haga sus veces y a la **EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C.E EMRU**, representado por el Representante Legal o quien haga sus veces, por los graves perjuicios morales, y materiales causados a mi representado, con motivo de la muerte de **ERIKA MARIN PALACIOS**, ocurrida el siete (7) de septiembre de 2018, cuando la retroexcavadora encargada del derrumbe de las edificaciones del Proyecto Ciudad Paraíso adelantaba labores de demolición, tumba una pared, la cual cae sobre su humanidad provocándole la muerte de forma inmediata

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior condénese al **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C.E EMRU**, de la siguiente manera:

1. PERJUICIO MORAL:

Para mi representado **JOSE LIBARDO ARCE**, solicito como indemnización por el perjuicio moral que le ha causado la muerte de su cónyuge o compañera

permanente, el reconocimiento y pago de CIENTO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, debido a la angustia, congoja, tristeza, desolación, preocupación que ha tenido que soportar como consecuencia de su pérdida.

JOSE LIBARDO ARCE100 SMLMV

2. PERJUICIO MATERIAL:

Condenar al **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C.E EMRU**, a pagar a favor de JOSE LIBARDO ARCE, los perjuicios materiales (a título de lucro cesante) que ha sufrido con motivo de la muerte de su compañera permanente ERIKA MARIN PALACIOS teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación.

1- Lo que se demuestre dentro del proceso, o en subsidio de lo anterior el salario mínimo legal vigente en enero de 2018, es decir la suma de setecientos ochenta y un mil pesos doscientos cuarenta y dos pesos (\$781.242.00) pesos mensuales, más un treinta (30%) por ciento de prestaciones sociales. Según las pautas seguidas por el Consejo de Estado, la suma con la cual se liquiden los perjuicios materiales no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente para la fecha en la cual se dicte la sentencia, o se apruebe el auto que liquide dichos perjuicios.

2- La vida probable de la víctima y del demandante, según la tabla de supervivencia aprobada para los colombianos por el DANE.

3- Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre enero de 2018 y el que exista cuando se produzca la sentencia, o el auto que liquide los perjuicios materiales.

4- Según las fórmulas de matemáticas financieras aceptadas por el Consejo de Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura.

3. INTERESES: Se debe al demandante o a quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo, los que se generen a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia.

De conformidad en lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil, todo pago se imputará primero a intereses.

Se pagarán intereses comerciales y moratorios desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

4. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su ejecutoria, de conformidad con el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

HECHOS

- 1) En la ciudad de Santiago de Cali, LA ALCALDIA a través de la EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C.E EMRU está ejecutando el Proyecto Ciudad Paraíso, que busca la renovación urbana del centro de Cali, para lo cual se requiere adquirir los predios de la zona, hacer su demolición, y realizar las nuevas obras que contempla el proyecto.
- 2) El día siete (7) de septiembre de 2018, aproximadamente a las 13:30 horas, en la carrera 12 entre calles 12 y 13, se presentó un trágico accidente, ocurrido dentro de un inmueble en demolición, cuando la retroexcavadora encargada del derrumbe de las edificaciones del Proyecto Ciudad Paraíso adelantaba labores de demolición, tumba una pared, la cual cae sobre la humanidad de la señora ERIKA MARIN PALACIOS provocándole la muerte de forma inmediata.
- 3) La señora ERIKA MARIN PALACIOS, en vida se identificaba con la cedula de ciudadanía N° 1.107.074.054, era de ocupación recicladora, convivía en unión libre desde hace aproximadamente 20 años con el señor JOSE LIBARDO ARCE, y tenía 45 años al momento de su muerte.
- 4) El día del accidente, en horas de la mañana, la señora ERIKA MARIN PALACIOS le solicitó prestada una segueta a su cónyuge el señor JOSE LIBARDO ARCE para ir a cortar varillas, quien pasa a las 11 am y la observó en el lugar de los hechos junto a otras personas, esperando los escombros producto de las labores de la máquina retroexcavadora. Mi cliente siguió a su casa, y a las 3 pm volvió a transitar por el lugar, observando una gran cantidad de gente.

Imaginando que alguien posiblemente había fallecido, se acercó al lugar a preguntarle a una señora que observaba lo que sucedía de nombre GABRIELA GIRALDO ARIAS, si era un hombre o una mujer la persona que había fallecido, a lo que ella le respondió "que era una mujer que llamaban La Cantante", razón por la cual se aproximó y confirmó que era su Compañera Permanente ERIKA quien se encontraba sin vida en lugar.

- 5) La NECROPSIA N° 20180101176001002022 realizada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, concluye que ERIKA MARIN PALACIOS, de 45 años de edad, presentó aplastamiento por pared, se evidenció trauma por aplastamiento con compromiso de órganos vitales con sangrado masivo y trauma raquimedular, lo que ocasionó su muerte de manera violenta-accidental.
- 6) Una vez ocurrido el accidente, se logró observar que los trabajos de demolición que se adelantaban en ese momento, se desarrollaban sin las medidas de seguridad mínimas necesarias para realizar estas labores, lo cual se evidencia con las declaraciones de mi cliente, quien no observó señalizaciones de

advertencia o precaución en el lugar, y de las señoras GABRIELA GIRALDO ARIAS y NORA ESTELIA CAJIAO LASSO, quienes fueron testigos de la falta de señalización y precaución por parte de los trabajadores encargados de la demolición (ver declaraciones extrajuicio).

Eso mismo se evidencia de lo consignado en el Formato FPJ-4 Actuación del Primer Respondiente N° CASO 760016000193201818583, suscrito por los agentes DIEGO FABIAN SOTELO y DIEGO ARMANDO MEJIA adscritos a la Policía Nacional, quienes en el punto N° 4 INFORMACION OBTENIDA SOBRE LOS HECHOS reportan que: "al llegar al lugar de los hechos observamos una maquina tipo retroexcavadora y a pocos metros una persona de sexo femenina sin signos vitales; es de anotar que el lugar no se encuentra con las respectivas medidas de seguridad para realizar las demoliciones." (ver anexo)

- 7) Como consecuencia de estos hechos, al ser tan evidente la falta de medidas de seguridad, La Personería de Santiago de Cali envió el **Oficio de Radicación N° 20182200167401** del 13 de septiembre del 2018 al Gerente de la EMRU, suscrito por la Personera Delegada ANGELA PIEDAD PATIÑO GARCIA, en el que hizo varias recomendaciones a la EMRU en lo concerniente al Proyecto Ciudad Paraíso, de lo cual se resalta lo siguiente: *"La Personería de Cali realizó en días pasados una visita de verificación a la comuna 3 sector San Pascual, centro de Cali, donde la Alcaldía a través de la Empresa Municipal de Renovación Urbana – EMRU adelanta el proyecto ciudad paraíso.*

En la zona de la calle 13, varios inmuebles ya fueron adquiridos por la EMRU y están inmersos en procesos de demolición. Sin embargo en la visita del ente de control se pudo evidenciar que algunas de estas demoliciones se están realizando sin adecuadas medidas de seguridad (que obliga la normatividad vigente) poniendo en peligro la vida y la integridad de los habitantes del sector y de las personas que por allí transitan o conviven. (...)

(...) Tal es el caso de un habitante de calle que falleció el pasado 7 de septiembre en la zona tras el desplome de un muro en medio de la demolición. Según narraron testigos a medios locales, la señora recogía materia cerca donde operaba maquinaria pesada.

Precisamente los habitantes del sector denuncian que tras las demoliciones, habitantes de calle que cohabitan la zona, realizan prácticas informales de extracción de materiales como hierro y residuos de demolición, entrando a los terrenos sin ningún tipo de control.

Por ello la Personería de Cali realizo varias recomendaciones a la EMRU en lo concerniente al proyecto Ciudad Paraíso como son:

- *Realizar las demoliciones del proyecto bajo las más estrictas medidas de seguridad exigidas por la Ley*
- *Implementar medidas de cerramientos y demarcación en los procesos de demolición, para evitar la presencia de personas o habitantes de calle, y que se causen perjuicios a la vida e integridad de los mismos.*

- Verificar que en los predios sujetos a procesos de demolición no habite o transite ningún habitante de calle que pueda verse afectado en las obras... (ver anexo)

Del anterior oficio se puede concluir, que al momento de adelantar los trabajos de demolición el día del fallecimiento de ERIKA MARIN PALACIOS, no se cumplieron con las medidas de seguridad que exige la ley, ni con las medidas de cerramiento exigidas para llevar a cabo estas labores, medidas éstas que, de haberse cumplido, muy posiblemente no hubiera ocurrido este final luctuoso.

- 8) La Resolución del Ministerio del Trabajo N° 2413 de 1979, Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción, establece:

"Artículo 51. La edificación que se vaya a demoler para su posterior construcción, o el terreno (superficie) que se vaya a construir, se encerrará provisionalmente por medio de barreras (vallas de tablas), a una altura adecuada, y se colocarán vallas en aquellos lugares en donde puedan desprenderse bloques de ladrillo, cemento, materiales, etc., para evitar que los escombros, etc., caigan a las vías públicas o andenes con peligro para los transeúntes y los vehículos.

Artículo 52. En las áreas donde se hagan demoliciones deberá prohibirse la entrada a personas extrañas, y tomarse las precauciones necesarias para evitar accidentes y daños a terceros."

Al no darle aplicación a estas normas, se configura la OMISION por parte de las autoridades públicas, que originó el daño antijurídico que se imputa.

- 9) La jurisprudencia del Consejo de Estado, mediante Sentencia No. 14.397 de la Sección Tercera, proferida el 28 de noviembre de 2002. Actor: Ana María Marín de Galves y otros, consideró lo siguiente:

"(...) el régimen de responsabilidad que se aplica frente a los daños derivados de la ejecución de una obra pública, debe definirse con fundamento en el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet (donde está la utilidad debe estar la carga) que hace responsable de los perjuicios a quien crea la situación de peligro, toda vez que cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si la ejecutara directamente."

"(...) la responsabilidad que se reclama proviene del daño causado con ocasión de la ejecución de una obra a favor del Estado, con independencia de que el daño haya sido sufrido por una persona destinada por el contratista ejecutor de la obra a la realización de la misma, o por un tercero ajeno por completo a la actividad contractual en la que es parte el Estado, es claro el compromiso de la responsabilidad patrimonial del Estado, como beneficiario de la obra, como destinatario de la misma y por ende como sujeto de imputación de los daños que con ella se causen. (...) "

Asi mismo, en la Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 28 de noviembre de 2002, Expediente No. 14.397, reiterada en sentencia 15059 proferida el 9 de julio de 2005, se expuso:

"Una entidad pública debe hacerse responsable por daños antijurídicos ocasionados a terceros por un contratista con ocasión de la ejecución de un contrato de obra a favor del Estado, porque:

- 1. La ejecución de la obra por parte de contratista es como si la desarrollara la misma entidad, por tanto es responsable de los daños que el contratista ocasione en desarrollo del contrato.*
- 2. La entidad al ser la beneficiaria de la obra, también es responsable de los daños que se den en desarrollo de la misma."*

10) La señora ERIKA MARIN PALACIOS se dedicaba al reciclaje, y con el dinero que devengaba por esta actividad, ayudaba económicamente para el sostenimiento de los gastos del hogar que tenía con mi cliente, con tal fin trabajaba y ganaba en promedio el salario mínimo para esa época, o sea la suma de \$781.242 mensuales.

11) Mi cliente junto a su compañera ERIKA MARIN PALACIOS, fueron víctimas de desplazamiento forzado en el año 2008, razón por la cual vinieron desde el Caquetá a vivir a la ciudad de Cali, tan como consta en los registros de la Unidad para las Víctimas del Gobierno Nacional, en donde aparecen registrados como cónyuges o compañeros. La consulta de este trámite y las declaraciones extraprocerales de dos testigos, sirvieron como prueba, para que la Fiscalía General de la Nación Fiscal 115 Local GUF Cali, ordenara al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la entrega del cadáver de la señora MARIN PALACIOS a mi poderante, acreditándolo como compañero permanente. (ver anexo)

12) Mi mandante JOSE LIBARDO ARCE, ha sufrido mucho moralmente con la muerte de su compañera permanente, por eso solicito para él, el equivalente a CIENTO SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.

Sobre éste tópico, el Honorable Consejo de Estado ha precisado:

"En relación con el perjuicio moral, debe precisarse que la sala en diversos pronunciamientos ha señalado que este tipo de daño se presumen en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí que, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral. En este orden de ideas, se accederá a los requerimientos elevados en la demanda, motivo por el que los perjuicios morales serán decretados, previo señalamiento de que conforme a lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, se ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral, considerando que la valoración

del mismo debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, por ello se sugirió la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado¹.

En reciente pronunciamiento, el H. Consejo de Estado, a través de ocho sentencias de unificación del pasado 28 de agosto, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado fijó los topes indemnizatorios correspondientes al daño moral y a la salud y a la afectación relevante a bienes o derechos constitucional y convencionalmente amparados.

Para fijar la cuantía respectiva, la corporación determinó cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y quienes alegan los perjuicios, según el grado de consanguinidad o parentesco civil y la existencia de una relación no familiar.

De manera general, estableció que para compañeros permanentes, cónyuges, padres o hijos, el resarcimiento será de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV); para hermanos, abuelos y nietos, se reducirá a 50; para familiares en el tercer grado de consanguinidad, siempre que se demuestre lazo afectivo, 35; para el cuarto de grado de consanguinidad o civil, 25 y para relaciones afectivas no familiares, 15.

Establecido el parentesco, es indudable el daño a la vida en relación causado al demandante en su calidad de compañero permanente de la occisa, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que los daños antijurídicos sufridos por un pariente cercano causan dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad.

Las reglas de la experiencia, y la práctica científica han determinado que en la generalidad, cuando se está ante la pérdida o afectación física o psíquica de un ser querido, se siente aflicción.

El DAÑO MORAL ha sido definido por la Alta Corporación en lo Contencioso Administrativo como el dolor espiritual, sufrimiento, congoja que afecta tanto a la víctima directa del daño, a sus familiares y demás personas allegadas, este sufrimiento puede ser consecuencia de una lesión física o de la pérdida de un ser querido, por lo tanto este perjuicio inmaterial deberá ser resarcido a mi representado, ya que han sufrido un daño moral por la muerte de ERIKA MARIN PALACIOS.

- 13) Mi mandante también sufrió enormes perjuicios materiales, porque ERIKA MARIN PALACIOS le ayudaba al sostenimiento del hogar, y con su muerte se verá privado de esta ayuda material.

¹ Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 25 de Septiembre de 2013, exp.36460 C.P. Enrique Gil Botero.

- 14) Existe una relación de causalidad entre la falla del servicio presunta y el daño causado al demandante.

FUNDAMENTO JURIDICO

Como elemento introductorio, pero vertebral para este caso, podemos decir que de los hechos ocurridos y narrados en el acápite correspondiente son de suyo causantes de un daño antijurídico que no se está legalmente obligado a soportar, y especialmente no lo estaba el señor **JOSE LIBARDO ARCE**; es decir que éste no tenía por qué soportar el accidente, y la pérdida de su compañera, de que fue víctima fruto de la omisión o negligencia de la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CALI y EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA EMRU encargadas del Proyecto Ciudad Paraíso y de la debida implementación de medidas de seguridad en los trabajos de demolición, razones estas que hacen enteramente inadmisibles que en el sitio donde se adelanta el Proyecto perdiera la vida la señora ERIKA MARIN PALACIOS, de forma que no existe justificación para que dichos trabajos se adelantaran sin las medidas de cerramiento necesarias para evitar daños a las personas, situación que genera alto riesgo y atenta contra la vida, la integridad y los bienes de sus transeúntes, y que en el caso particular cobró la vida de la compañera permanente de mi poderdante, que le dejó una grave y permanente afectación.

La figura o régimen jurídico aplicable.

Si bien en esta instancia de conciliación prejudicial, y así en cualquier acto de conciliación o arreglo amistoso, no se pretende entrar en disputa sino por el contrario armonizar las posiciones y llegar a una concertación amistosa respecto de las circunstancias dañinas, de todas maneras, me es dable y creo pertinente exponer la figura jurídica que estimo ajustable al caso presente, para que se obtenga mayor percepción de lo acaecido. Así, y sin la intención de adentrarme en pleitos de carácter procesal, sino con fines netamente argumentativos e incluso académicos presento este aparte.

En este literal expondré la figura jurídica que aprecio aplicable al presente caso, para que usted señor(a) Procurador(a) y el representante legal o quien haga sus veces del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI y EMRU EIC, lo aprecien, dado que en mi criterio este es el régimen jurídico que más se ajusta al caso particular, y que sería tal vez el estudiado por el Juez(a) en el evento que esta situación no se pudiese solucionar por la vía de la conciliación prejudicial y se debiese acudir a lo Contencioso Administrativo.

Una vez mencionado lo anterior sea, pues, lo primero referirse a lo contemplado en nuestra Constitución Política de 1991, desde su preámbulo pasando por varios postulados hasta llegar al artículo 90.

Como valores fundantes del texto constitucional encontramos los del preámbulo, de entre los cuales se destacan para el presente asunto, el aseguramiento de la vida a los integrantes de esta Nación colombiana, la justicia, dentro de un marco jurídico y bajo un orden político, económico y social justo. Así entonces, podemos colegir con

suficiente claridad las valías que se le han dado a la Carta, lo que significa la albúmina vigencia de la misma bajo el criterio de una Estado Social de Derecho que se interesa en el ser humano, antes que priorizar el aspecto normativo e institucional sin antes mirar las necesidades y derechos de las personas. Se habla, pues, de una Constitución antropocéntrica.

Me refiero al aseguramiento de la vida de los habitantes del territorio dado que es el estado quien debe brindar las mejores condiciones, dentro de sus posibilidades, pero haciendo los mayores esfuerzos, para resguardarle de todo atentado, peligro, agresión o situación que le represente perjuicio.

Hay normas constitucionales que cabe mencionar, pues aquellas han sido flagrantemente transgredidas con el actuar (o con el dejar de actuar) de la administración, en este caso, por una omisión en la implementación de medidas de seguridad al realizar las demoliciones y en la ausencia de medidas de cerramientos y señalización en los procesos de demolición, que hubiera evitado la presencia de personas ajenas al personal autorizado y la afectación a la vida e integridad de los mismos. El artículo 2 es una de tales normas constitucionales descuidadas, pues el Estado tiene entre sus fines esenciales el de servir a la comunidad, y ese servicio implica un todo integral en las necesidades y derechos de las personas buscando garantizar y proteger con ello la vida, honra, bienes y un cúmulo de derechos. Sin duda, en el caso *sub – examine* se han desatendido estos principios, pues por el mero hecho que la administración municipal de Cali o entidad correspondiente no haya actuado con la suficiente diligencia y cuidado para cumplir con lo que exige la Ley Colombiana para desarrollar los trabajos de demoliciones, implementando medidas de cerramiento, sabiendo que en la zona había un gran número de personas que corrían el riesgo de verse afectadas con las obras, atenta contra la vida, la integridad, los bienes y el derecho de las personas de contar con el buen servicio de lo público.

Posteriormente encuentro violentado el artículo 11 constitucional, en la medida en que la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALI y la EMRU, causaron la pérdida de la vida de la señora ERIKA MARIN PALACIOS, y puso en evidente peligro la vida, como efectivamente sucedió, de un gran número de personas que utilizan los trabajos de demolición para recolectar materiales reciclables, pues al no existir cerramientos ya por sí mismo implica una ausencia de garantía del derecho a la vida.

Por ello puedo argumentar que el derecho a la vida que manifiesta este postulado, en clara vinculación con el derecho a la integridad personal o física, es de responsabilidad del Estado en cuanto a su protección, más aun cuando son actividades que están a cargo del mismo de manera directa o indirecta. De modo que es apenas lógico decir que la obligación primordial de las autoridades es la de proteger la vida (y los derechos relacionados con ella) así como los más elementales derechos de las personas, teniendo en consideración que la vida, como supremo fundamental, es el soporte sobre el cual se estructura el conjunto de derechos y la efectiva protección de ellos bajo la plena vigencia de los fines esenciales del Estado Social de Derecho.

En ese orden sucinto de ideas, se puede pasar a estructurar con base en todo ello la responsabilidad del Estado que predica el artículo 90 de la Constitución Política.

Textualmente el artículo 90 indica:

Carrera 15 N° 43A – 04 Oficina 201 Celular: 3154181753
E-mail: fabianportilla.abogado@hotmail.com. Cali - Colombia

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste".

La Constitución misma consagra una cláusula general de responsabilidad del Estado y constituye un mandato imperativo que endilga la carga de reparar los daños que sean ocasionados por los miembros, instituciones o entidades del Estado. Lo estipulado en éste artículo muestra que lo que se condena es la causación del daño y ya no tanto la antijuridicidad de la conducta de la administración solamente, por lo que debe de repararse indefectiblemente el perjuicio ocasionado con su conducta activa u omisiva, sea que interese o no el agente causador del perjuicio; aunque como se sabe hay situaciones que no admiten esa forma, caso en el cual estará a cargo del Juez adecuar o adoptar la figura jurídica más apropiada y que mejor encuadre en el caso y que siempre propenda por la búsqueda de la reparación integral del daño.

Se evidencia, de lo ocurrido, que lo que hay en el caso *sub examine* es una falla del servicio de la administración por omisión en la implementación de medidas de seguridad al realizar las demoliciones y en la ausencia de medidas de cerramientos y señalización en los procesos de demolición, que evitaran la presencia de personas que se vieran afectadas con las obras, elementos estos que hacen demostrable el nexo de causalidad entre el hecho y el daño.

La carencia de medidas de cerramiento provisionales y demarcación, y la falta de precaución necesaria para evitar daños a terceros, sin duda produjeron un daño antijurídico, daño que *"consiste siempre en una lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar, y que la diferencia, en cada caso, está marcada por los títulos jurídicos de imputación del daño, que determinan la imputabilidad jurídica, más allá de la causalidad material, que se deriva del nexo causal"*. (Expediente 8118. Actora: Sociedad Constructora Cárdenas y Maya Ltda. Consejo de Estado).

En mi criterio las conductas tales como un retardo, una irregularidad, incumplimiento, ineficiencia, omisión o simplemente la ausencia del servicio, implica que la administración ha actuado de tal forma o dejado de actuar debiéndolo hacer; por otra parte, debe de existir también un daño, que implique un detrimento en la persona que lo sufre y sus familiares o allegados sentimentalmente o en sus bienes; y una relación de causalidad entre la falta o falla en el servicio y el daño, que genera un hecho dañoso y perjudicial. Los elementos que se han descrito están evidentemente presentes en este caso, pues está la falla o falta en la implementación de las más estrictas medidas de seguridad en las demoliciones del Proyecto Ciudad Paraíso y la ausencia de medidas de cerramiento que evitaran la

presencia de personas que se vieran afectadas con las obras, y el daño perpetrado en la pérdida de la vida de ERIKA MARIN PALACIOS al caerle un muro derribado por la retroexcavadora encargada de las demoliciones del mencionado Proyecto, y el consecuente y lógico perjuicio en su familiar, o sea en mi poderdante; y al tiempo que se encuentra dado el nexo de causalidad entre el hecho producto de la falla y el daño antijurídico recibido, como se logra concatenar de todos los elementos probatorios.

PRUEBAS

PRUEBAS DOCUMENTALES QUE SE APORTAN:

Se adjuntan para que se tengan como pruebas las siguientes:

1. Poder especial auténtico conferido por mi representado.
2. Declaraciones extraprocesales de los señores JAMES ZAPATA GALEANO C.C. 16.695.422, JUAN CARLOS PORTILLA CAICEDO C.C. 16.695.329, copia del trámite en calidad de desplazados ante la Unidad de Víctimas por parte de mi cliente y de la orden para entrega de cadáver, que acreditan al señor JOSE LIBARDO ARCE como compañero permanente de ERIKA MARIN PALACIOS.
3. Copia de las cédulas de ciudadanía de JOSE LIBARDO ARCE y ERIKA MARIN PALACIOS
4. Copia del Reporte de Iniciación FPJ-1 N° CASO 760016000193201818583
5. Copia del Formato Único de Noticia Criminal de la Fiscalía General de la Nación N° CASO 760016000193201818583
6. Copia del Acta de Inspección Técnica a Cadáver N° CASO 760016000193201818583
7. Copia del informe policial de accidentes de tránsito N° A000801331
8. Copia del Reporte de Iniciación FPJ-1 N° CASO 760016000193201818583
9. Copia del Informe Ejecutivo FPJ-3 N° CASO 760016000193201818583
10. Copia de la Actuación del Primer Respondiente FPJ-4 N° CASO 760016000193201818583
11. Copia de la solicitud de entrega de cadáver realizada por JOSE LIBARDO ARCE y anexos.
12. Copia del dibujo topográfico FPJ-17 N° CASO 760016000193201818583
13. Copia del Informe de Investigador de Campo FPJ-11 N° CASO 760016000193201818583
14. Copia del Informe Pericial de Necropsia N° 2018010176001002022
15. Declaración extraprocesal del señor JOSE LIBARDO ARCE
16. Declaración extraprocesal de la señora GABRIELA GIRALDO ARIAS C.C. 31.173.747
17. Declaración extraprocesal de la señora NORA ESTELIA CAJIAO LASSO C.C. 31.906.558

18. Copia del oficio de Radicación N° 20182200167401 del 13 de septiembre del 2018, enviado por la Personería de Santiago de Cali al Gerente de la EMRU, suscrito por la Personera Delegada ANGELA PIEDAD PATIÑO GARCIA, en el que hizo varias recomendaciones del proyecto ciudad paraíso.
19. Copia del Acta de audiencia de conciliación extrajudicial de radicación No. 9634 del 5 de abril de 2019, declarada fallida por la Procuraduría 59 Judicial I para asuntos administrativos.
20. Copia de la cedula de ciudadanía y Tarjeta Profesional de Abogado.

PRUEBAS TESTIMONIALES:

Ruego a usted, tener como prueba, por su valor legal, los testimonios de mi cliente, de la señora GABRIELA GIRALDO ARIAS quien se identifica con la C.C. 31.173.747 y reside en la Carrera 12 N° 11-33 tel. 3235166661 y de la señora NORA ESTELIA CAJIAO LASSO identificada con C.C. 31.906.558 residente en la Carrera 12 N° 11-62 te. 4497464.

Me reservo el derecho de aportar pruebas el día de la conciliación de conformidad con el numeral 1 del artículo 9 del decreto 1716 de 2009.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA.

Es usted competente por la naturaleza del asunto, el lugar de ocurrencia de los hechos, y la cuantía Me permito estimar razonadamente la cuantía de acuerdo a la pretensión mayor. Según lo establecido en la Ley 1450 de 2011 y la 1437 de 2011, es equivalente a CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIESCISEIS PESOS (\$104.342.616) por concepto de lucro cesante.

PROCEDIMIENTO

El procedimiento a seguir es el establecido en los artículos 179 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ANEXOS

Acompaño copia de la demanda y de sus anexos para dar en traslado a la parte demandada, al agente del ministerio público, y de la demanda para el archivo del despacho

JURAMENTO

Bajo la gravedad de juramento le manifiesto que la parte solicitante no ha adelantado ante ninguna autoridad judicial demanda alguna, como tampoco solicitudes de conciliación con base en los mismos hechos.

NOTIFICACIONES

A los demandantes y al suscrito, en la Carrera 15 No. 43A-04 oficina 201 de la ciudad de Santiago de Cali; Celular: 3154181753, e-mail: fabianportilla.abogado@hotmail.com

Del señor Juez,



FABIAN ANDRES PORTILLA CASTRILLON
T.P. 178.456 C.S.J.
C.C.94.064.342

FABIAN ANDRES PORTILLA CASTRILLON
ABOGADO

Santiago de Cali, Octubre de 2018

Señor

PROCURADOR DELEGADO ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y/O JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI

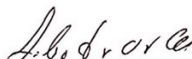
REF: PODER ESPECIAL

JOSE LIBARDO ARCE identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, por medio del presente escrito, me permito manifestar que confiero **PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE** al Dr. **FABIAN ANDRES PORTILLA CASTRILLON**, Abogado en ejercicio, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.064.342 de Cali, portador de la tarjeta profesional No. 178.456 del Consejo Superior de la Judicatura, para que adelante y lleve hasta su terminación un **TRAMITE CONCILIATORIO PREJUDICIAL** con la **EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C. EMRU y/o MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI** y de ser necesario **PROCESO EN ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA** contra las mismas entidades, con el propósito que me sean reconocidos los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) e inmateriales (daño moral, daño a la vida de relación), como consecuencia del fallecimiento de su cónyuge la señora **ERIKA MARIN PALACIOS**, identificada en vida con la cedula de ciudadanía N° 1.107.074.05, quien perdió la vida el 07 de septiembre de 2018, en el sector donde se desarrolla el proyecto ciudad paraíso, al ser víctima de las demoliciones que se adelantan en el lugar sin las medidas de protección necesarias para esta actividad.

Mi apoderado queda facultado conforme al artículo 70 del C.P.C., y en especial para recibir, conciliar, transigir, desistir, interponer recursos, sustituir y reasumir, así como todas las demás facultades necesarias para el encargo.

Sirvase reconocer personería jurídica para los fines y en los términos del presente mandato.

De usted respetuosamente


JOSE LIBARDO ARCE
C.C. 16.662.279

ACEPTO EL PODER


FABIAN ANDRES PORTILLA CASTRILLON
T.P. 178.456 del C. S. de la J.
C.C. 94.064.342 de Cali

Carrera 15 No. 43 A - 04 - Oficina 201 - Celular: 315 418 17 53 - 300 786 71 16
E-mail: fabianandresp@hotmail.com. Cali - Colombia

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



32683

En la ciudad de Cali, Departamento de Valle, República de Colombia, el cuatro (04) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Catorce (14) del Círculo de Cali, compareció:

JOSE LIBARDO ARCE, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0016662279 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Arce



56dbng2qx6el
04/10/2018 - 11:09:11:606



----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de PODER, en el que aparecen como partes JOSE LIBARDO ARCE y que contiene la siguiente información PODER.

cy



MARIA VICTORIA GUTIERREZ RUBIANO
Notaria catorce (14) del Círculo de Cali - Encargada

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 56dbng2qx6el



RESOLUCIÓN No. 11174
DE FECHA. 14 SEP 2018
PROFERIDA POR LA SNR